



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN
Edificio Canencio, carrera 4 No. 2-18 de Popayán (Cauca)
j02admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co

Popayán, seis (06) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024)

Expediente:	19001-33-33-002-2019-00226-00
Demandante:	SANDRA MILENA NOSSA GARCÍA Y OTROS
Demandado:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYÁN E.S.E.
Medio de Control:	REPARACIÓN DIRECTA

Auto interlocutorio No. 95

Pasa a consideración del Despacho, otorgamiento de poder por la señora Carmen Bolivia Sánchez de Torres y solicitud de desistimiento de la demanda presentado por el señor Jeisson Alejandro García Niño.

Para resolver, **se considera:**

ANTECEDENTES:

1. El abogado de los demandantes, Señor Roberth Andrés Rico Montenegro, falleció el 06 de mayo de 2022, conforme al Registro Civil de Defunción, serial No. 11491824.
2. Mediante auto interlocutorio No. 126 del 16 de febrero de 2023, se dispuso la interrupción del proceso y se requirió a los demandantes IRIS GARCÍA NIÑO, EDILBERTO NOSSA ZAMBRANO, CARMEN BOLIVIA SANCHEZ DE TORRES y JEISSON ALEJANDRO GARCÍA NIÑO con el fin de que otorgaran poder dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia.
3. El 24 de febrero de 2023, la abogada Sandra Isabel Rico Gómez allegó poder debidamente conferido por los señores: Iris García Niño, Edilberto Nossa Zambrano y Leidy Vanesa Torres Nossa; y solicitó la aplicación de la agencia oficiosa respecto de los señores Carmen Bolivia Sánchez y Jeisson Alejandro García.

4. El 17 de agosto de 2023, mediante providencia No. 732, el Juzgado reanudó el trámite procesal y ordenó la constitución en el término de 10 días de la caución ordenada en el Art 57 CGP, para después calificar su suficiencia y estudiar la agencia oficiosa.
5. El 17 de noviembre de 2023, el Despacho aceptó el desistimiento de la solicitud de agencia oficiosa y requirió a los demandantes información de los señores Carmen Bolivia Sánchez de Torres y Jeisson Alejandro García Niño; con el fin de notificarlos sobre la ausencia de apoderado que represente sus intereses dentro del presente proceso.
6. El 27 de noviembre de 2023, se allegó poder otorgado por la señora Carmen Bolivia Sánchez de Torres en favor de la abogada Sandra Isabel Rico Gómez.
7. El 02 de febrero de 2024, se allegó solicitud de desistimiento de las pretensiones por el señor Jeisson Alejandro García Niño.

Al respecto, **SE CONSIDERA:**

El desistimiento de las pretensiones, se encuentra regulado en el artículo 314 del C.G.P., aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, que dispone:

“ARTÍCULO 314. DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES. El demandante podrá desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso. Cuando el desistimiento se presente ante el superior *por haberse interpuesto por el demandante apelación de la sentencia o casación, se entenderá que comprende el del recurso.*

El desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada. El auto que acepte el desistimiento producirá los mismos efectos de aquella sentencia.

Si el desistimiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones, o si sólo proviene de alguno de los demandantes, el proceso continuará respecto de las pretensiones y personas no comprendidas en él.

En los procesos de deslinde y amojonamiento, de división de bienes comunes, de disolución o liquidación de sociedades conyugales o patrimoniales, civiles o comerciales, el desistimiento no producirá efectos sin la anuencia de la parte demandada, cuando esta no se opuso a la demanda, y no impedirá que se promueva posteriormente el mismo proceso.

El desistimiento debe ser incondicional, salvo acuerdo de las partes, y sólo perjudica a la persona que lo hace y a sus causahabientes.

El desistimiento de la demanda principal no impide el trámite de la reconvencción, que continuará ante el mismo juez cualquiera que fuere su cuantía.

Cuando el demandante sea la Nación, un departamento o municipio, el desistimiento deberá estar suscrito por el apoderado judicial y por el representante del Gobierno Nacional, el gobernador o el alcalde respectivo.”

De otra parte, el artículo 315 ibidem, consagra que no pueden desistir de las pretensiones de la demanda: i) los incapaces y sus representantes legales; ii) los apoderados que no tengan facultad expresa para ello; y iii) los curadores ad litem.

Bajo este contexto, los presupuestos que deben ser analizados para que proceda la aceptación del desistimiento son: que no haya sido proferida sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso, y que sea presentado por una persona capaz y facultada para tal fin.

Revisado el proceso, se establece que se encuentra pendiente de fijación en lista para el traslado de excepciones, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos, para que proceda el desistimiento de las pretensiones.

En cuanto a la facultad para desistir, se tiene que es el propio demandante, quien está realizando la solicitud de desistimiento, por lo que, también se cumple con este requisito.

En consecuencia, como la solicitud cumple con los presupuestos legales previstos en los artículos 314 y siguientes del CGP, se aceptará el desistimiento de las pretensiones de la demanda.

Por último, es del caso resolver si de la aceptación del desistimiento deviene automáticamente en una condena en costas contra el extremo interesado, tal como podría entenderse de la lectura del inciso 3º del artículo 316 del CGP: “[e]l *auto que acepte un desistimiento condenará en costas a quien desistió, lo mismo que a perjuicios por el levantamiento de las medidas cautelares practicadas.*”

Al respecto los artículos 365 y 366 del CGP, regulan específicamente la condena en costas y en el numeral 8 del artículo 365 se dispone que: “[s]olo *habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.*”

Así, para que proceda la condena en costas, es necesario que este probado dentro del proceso que estas se causaron; pues la determinación de las costas no es una consecuencia automática del desistimiento, para imponerlas, el juez debe analizar la conducta asumida por las partes y determinar si estas se causaron y probaron.

Conforme a lo anterior, debido a que no se causaron, ni aparecen probadas en el expediente, el Despacho no impondrá condena en este sentido.

Finalmente reconocer personería para actuar a la abogada SANDRA ISABEL RICO GOMÉZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 34.568.451 y T.P. No. 113.136, para que actúe en nombre y representación de la señora CARMEN Bolivia Sánchez de Torres.

Con lo anterior, se precisa, que la parte demandante queda constituida por las siguientes personas:

1. **Sandra Milena Nossa García,** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.886.432 de Bogotá, quien confiere poder en nombre propio y en nombre y representación de los menores: **Maira Alejandra Torres Nossa, Cristian Ronaldo Torres Nossa, Emanuel Romario Torres Nossa, Denilson Torres Nossa.**
2. **Dehiby Stiven Lagos Nossa,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.000.986.520 de Bogotá.

- 3. **Edgar Hernán Torres Sanchez**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.045.120 de Bogotá.
- 4. **Iris García Niño**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.712.223 de Bogotá.
- 5. **Leidy Vanesa Torres Nossa**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.022.926.860.
- 6. **Edilberto Nossa Zambrano**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.423.317 de Bogotá.
- 7. **Carmen Bolivia Sánchez**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 25.681.636

Quienes están representados por la abogada SANDRA ISABEL RICO GOMÉZ.

Con lo anterior, se encuentra superada la causal de interrupción del proceso, por lo que, una vez ejecutoriado el presente proveído se dispondrá la fijación en lista para el traslado de excepciones, procurándole así, continuidad al proceso.

Por todo lo anterior, se **DISPONE:**

PRIMERO: ACÉPTASE el desistimiento de las pretensiones de la demanda de REPARACIÓN DIRECTA promovida por el señor Jeisson Alejandro García Niño, contra el Hospital Universitario San José.

SEGUNDO: RECONÓZCASE personería adjetiva a la abogada SANDRA ISABEL RICO GOMÉZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 34.568.451 y T.P. No. 113.136, para que actúe en nombre y representación de la señora CARMEN Bolivia Sánchez de Torres.

TERCERO: En firme este proveído, fíjese en lista para el traslado de excepciones.

CUARTO: NOTIFÍQUESE a las partes la presente providencia por estados electrónicos insertando en la publicación que se haga del estado electrónico la providencia que se notifica por ese medio.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA23-12068 el uso del aplicativo SAMAI en la jurisdicción contenciosa Administrativa es OBLIGATORIO, por lo tanto, los memoriales, peticiones y escritos de los procesos judiciales deberán radicarse a través de la ventanilla virtual del aplicativo SAMAI (circular PCS IC24-1 del 11 de enero de 2024)

Expediente: 19001-33-33-002-2019-00226-00
Demandante: SANDRA MILENA NOSSA GARCÍA Y OTROS
Demandado: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYÁN E.S.E.
Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Jueza,

Firmado electrónicamente
MAGNOLIA CORTÉS CARDOZO

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo web SAMAI. El certificado digital que valida la integridad y autenticidad de este documento podrá ser consultado en el link <https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx>